

De historia, administración de justicia y rescate de archivos: El fondo histórico del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Chilón-Ocosingo (1805–1920)

*Of history, administration of justice and rescue of files:
The historical fund of the mixed court of the first instance of Chilon-Ocosingo
(1805–1920)*

Anna María Garza Caligaris¹
Justus Fenner²

RESUMEN

Una pequeña fracción de lo que fue el archivo del Juzgado Mixto de Primera Instancia del departamento de Chilón-Ocosingo durante el siglo XIX ha sobrevivido hasta nuestros días. Este fondo histórico es una fuente privilegiada para realizar estudios de diversa índole sobre las transformaciones políticas, económicas y sociales que sufrió la región a lo largo de ese tiempo; sobre las instituciones que actuaron en el departamento; y muy especialmente sobre la vida legal que desarrollaron sus habitantes. Este artículo describe el rescate del fondo y su catalogación, e introduce a la institución que generó y resguardó la documentación. Presenta también dos de los primeros trabajos (tesis de licenciatura en historia) que lo utilizan como fuente principal.

Palabras clave: historia, antropología jurídica, rescate de archivos, estudios regionales.

ABSTRACT

A small part of what were the nineteenth century archives of the District Court in the political district of Chilón-Ocosingo has survived until our days. These historical archives can be considered a privileged source of information for studies on the political, economic and social transformation of this region. It informs about the institutions that were active in this political district and specifically about the law-related activities carried out by its inhabitants. This article describes the rescue and cataloging process of these records. It introduces the institution that generated and safeguarded them. The paper also briefly mentions the first two dissertations based on this material as their principal source of information.

Key words: history, legal anthropology, rescue of archives, regional studies.

INTRODUCCIÓN

Los fondos históricos conservados en el Archivo Judicial del estado de Chiapas son fuente de primer orden para conocer la vida social y política de los habitantes de las distintas regiones que hoy conforman esta entidad durante largos periodos temporales. Sobre Tuxtla, Tapachula, Tonalá, Simojovel, Pichucalco, Comitán, Chilón y San Cristóbal la documentación se remonta al menos al siglo XIX y la información que contienen permite acercarse a una gama muy amplia de aspectos sociales. A través de ella podemos conocer preocupaciones individuales, familiares, de barrios o de pueblos distintos. También nos informan de sus relaciones con personas o instituciones de regiones más o menos lejanas. Presenciamos, por medio de sus expedientes, convenios y arreglos entre socios, vendedores

y compradores, deudores y acreedores, amos y sirvientes, cónyuges, padres, hijos y otros parientes. Sabemos de disputas relacionadas con obligaciones materiales, morales, religiosas, políticas y cívicas de sujetos y ciudadanos diversos, de hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, ricos y pobres. Frecuentemente nos encontramos con personajes que han dejado huella en la historia política y económica chiapaneca, pero también a muchos otros de cuyas vidas nada sabríamos seguramente si no fuera por esta fuente.

Los documentos judiciales llevan a conocer mucho más que a los individuos directamente involucrados en los negocios en cuestión. Frecuentemente dan información sobre los contextos en donde los actores se mueven: los pueblos, las ciudades, los ranchos y las fincas. A veces nos permiten asomarnos de reojo a las habita-

¹ Instituto de Estudios Indígenas, UNACH, Centro Universitario Campus III. Boulevard Javier López Moreno s/n, Edificio B., Barrio de Fátima, C.P. 29264, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Correo-e: annagarz@hotmail.com

² Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, IIA, UNAM. Calle Cuauhtémoc No. 12, Colonia Centro, C.P. 29200, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Correo e: jfenner@servidor.unam.mx

ciones y negocios, otras veces nos proporcionan pormenorizada relación de todos los inmuebles y efectos que contienen.

Los expedientes nos muestran el funcionamiento de algunas de las instituciones más importantes en la época: hace aparición la Iglesia –sus conventos, parroquias, capillas y propiedades– especialmente en defensa de diversos intereses económicos; podemos encontrar a cabildos y ayuntamientos disputando tierras, aguas, o actuando contra particulares por diversas razones; las primeras escuelas de educación superior, los hospitales y algunos de los órganos de gobierno, representados por procuradores o apoderados, están también presentes en muchos de los juicios o a través de escritos de otro orden. En ocasiones puede encontrarse material muy detallado sobre los intereses materiales y políticos que estaban en juego en distintos momentos de la vida económica y política del estado y de sus instituciones.

Atrás de los textos aparecen también los funcionarios judiciales, las normas vigentes y los rituales establecidos para crear cierto tipo de documento o para enfrentar determinados problemas. Las diligencias nos llevan además a través de distintos tribunales y nos permiten conocer la organización judicial en uso, las dificultades que enfrentaban, sus vacíos, aciertos, abusos y corruptelas.

A pesar de su riqueza –con excepción del correspondiente al Juzgado de Primera Instancia de lo civil de San Cristóbal (1798-1920), ya catalogado y ordenado,¹ y del fondo que ahora presentamos– no se conoce siquiera el periodo exacto que abarcan o la extensión de su documentación, mucho menos su contenido.

MATERIALES Y MÉTODOS

El fondo histórico del Juzgado Mixto de Primera Instancia, departamento de Chilón–Ocosingo (1805 – 1920)

El fondo se encuentra resguardado en el Archivo del Poder Judicial, región Altos, situado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y abarca desde el siglo XIX hasta los años cincuenta del siglo XX. Presentamos ahora lo que compone el Juzgado Mixto de Primera Instancia del departamento de Chilón–Ocosingo entre 1805 y la segunda década de siguiente siglo.² Desafortunadamente sólo una pequeña fracción

de su acervo original se ha conservado; además, parte importante de lo que existe está en mal estado y plagado por hongos. Conocemos la magnitud de la pérdida, al menos entre 1805 y 1892, porque sobrevivieron algunos inventarios elaborados durante el siglo XIX y parcialmente, por la numeración de los fondos durante el periodo de 1893 a 1920.

La pequeña muestra que se conserva, sin embargo, brinda datos novedosos y de primera mano sobre una gama muy amplia de asuntos de una región fundamentalmente rural y con una situación económica y social muy dinámica. Esta información es invaluable tanto para el Poder Judicial, pues informa de su propia historia, como para una amplia gama de disciplinas académicas que pueden beneficiarse del estudio del pasado. Ahora ponemos a disposición pública una herramienta importante que permite un mejor acceso a la documentación: su catálogo.³ Facilita el acercamiento a los expedientes a los profesionales del derecho, a los investigadores de la historia de Chiapas y en general a los estudiosos de las ciencias sociales. Muy especialmente permite a la institución que le dio origen y bajo cuyo resguardo se encuentra, dar un mejor cuidado a sus acervos históricos.

El cuerpo principal del acervo conserva cuestiones criminales: lesiones, homicidios, robos, violaciones, etcétera y por otro lado asuntos civiles: juicios testamentarios, de tierras, demandas por deudas y contratos.

Sobre el rescate del fondo

La mayor parte de la documentación histórica de la región Chilón–Ocosingo fue destruida sea por enfrentamientos violentos ocurridos durante el siglo XIX y entre los años de 1914 y 1920, por factores climáticos y biológicos, o por simple desconocimiento, desinterés y descuido. El rescate del archivo histórico de lo que fue el Juzgado Mixto de Primera Instancia del departamento de Chilón adquiere por ello mucha importancia. El valor histórico de su acervo es de primer orden, también, porque contiene además de expedientes civiles, procesos penales, perdidos en el caso del departamento de San Cristóbal.

El archivo fue encontrado en febrero de 1994 en una bodega municipal de Ocosingo por integrantes del Programa de Rescate de Archivos Municipales en los Altos de Chiapas del Instituto Chiapaneco de Cultura (ahora Universidad de

Ciencias y Artes de Chiapas), encabezado por Justus Fenner. Los documentos fueron localizados entre deshechos de todo tipo: tambos de gasolina, material de construcción y material eléctrico. El espacio mismo había sido parte del campo de batalla entre fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ejército federal durante los primeros días de enero de 1994. El material fue entonces levantado y trasladado provisionalmente a la Casa de la Cultura de la misma ciudad. Los documentos estaban en condiciones críticas de conservación por haber estado durante varias semanas mojados y en el suelo y presentaban infestación por hongos. En la Casa de Cultura los documentos fueron extendidos, secados y parcialmente limpiados para evitar mayores daños.

A finales de la década de 1990 el Poder Judicial del Estado concentró gran parte de su documentación en su archivo estatal. Lo que quedaba del juzgado que nos ocupa fue entonces trasladado a Tuxtla Gutiérrez, donde permaneció hasta 2005. A partir de ese momento los documentos del fondo fueron movidos a las nuevas instalaciones del Archivo Regional del Poder Judicial de Los Altos, situado en San Cristóbal de Las Casas.

En 2007 Justus Fenner, investigador del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE) del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM y Anna María Garza, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas (IEI, UNACH) acordaron con el Tribunal Superior de Justicia del Estado el inicio de los trabajos de organización y clasificación de los documentos del departamento de Chilón. El proyecto fue financiado por el Sistema Interno de Investigación de la UNACH, en su séptima convocatoria. Dos alumnos, Iván Cristian López Hernández y Joaquín Prado Cancino, tesis de la carrera de historia de la misma universidad, colaboraron como becarios durante un año en las labores del proyecto. La planeación y supervisión de las labores estuvo a cargo del Mtro. Justus Fenner y de la Mtra. Anna Garza Caligaris.

Muchos de los fondos documentales sitios en Chiapas continúan en riesgo de perderse, a pesar de los esfuerzos de rescate, conservación y catalogación de algunos archivos que se han emprendido en los últimos años (Fenner, 2004). En general las instituciones han asignado muy pocos recursos para ello y para la capacitación

del personal encargado, de modo que es importante la continuidad en el esfuerzo tanto de organización, catalogación y preservación, como de la sensibilización de las autoridades que puedan ocuparse de la conservación futura de los acervos.

Proceso técnico del ordenamiento y la catalogación

Los expedientes del fondo estaban, pues, en completo desorden. Gracias a relaciones que datan de fines del siglo XIX hemos podido clasificar parte de los expedientes, los que fueron inventariados entre 1805 y 1891. Esta sección de nuestro catálogo contiene la relación tanto los documentos que han sobrevivido, como los extraviados. Ese procedimiento tiene la ventaja de facilitar el acceso a la información y al propio tiempo mostrar el funcionamiento de la institución que les dio origen o les resguardó.

Los inventarios con los que contamos siguen un criterio cronológico, aunque este principio no siempre se cumple. El que hemos utilizado como base contiene procesos y diligencias judiciales civiles o criminales, además de otro tipo de expedientes que informa sobre la vida administrativa del juzgado: libros de citas, de conocimientos, de exhortos, borradores de correspondencia etcétera. También se encuentran las comunicaciones recibidas de otras instancias y decretos emitidos por los gobiernos estatal y federal. A este tipo de documentación le hemos llamado administrativo.

El inventario incluye los siguientes datos: Año, normalmente se refiere al año en que se integró el expediente, pero en algunas ocasiones la fecha fue asignada cuando se cerró el proceso, o en otro periodo por error del secretario que creó el inventario o por alguna otra circunstancia; Título del expediente y número de fojas útiles que contiene (aunque en ocasiones este dato no es exacto); Ramo al que pertenece —es decir, criminal o civil.

En ocasiones el secretario proporciona alguna información adicional, que incorporamos como observaciones y algunas otras anotaciones que colocamos al final de la sección.

Partiendo de este inventario los expedientes del fondo fueron localizados, identificados y colocados en carpetas de papel manila. Las carpetas se metieron en cajas de polietileno y en estantes de metal, procurando su conservación.

La cédula que utilizamos fue la siguiente: Localización: caja, número consecutivo de expediente y número de expediente según los inventarios; Ramo: civil, penal o documento administrativo; Título: dado en el inventario y/o la portada del documento; Actores: actor o demandante, demandado y otros involucrados; Fojas: el número de fojas según el inventario y las que se conservan; Estado del documento; Existencia física; Observaciones: Se incluyen las diferencias que fuimos encontrando entre los datos del inventario y los suministrados por el propio documento, cuando las hubo. También se incluyó información adicional cuando la tuvimos.

Además de los expedientes inventariados se localizó un número de expedientes que no fueron inventariados por alguna razón, aunque corresponden al mismo periodo temporal (1805-1891). En nuestro Catálogo constituyen una segunda sección.

Después de 1891 los inventarios que encontramos son parciales e incompletos, de modo que el resto de la base de datos (secciones tercera y cuarta del Catálogo) se elaboró a partir de las existencias actuales; es decir, de los expedientes que han sobrevivido. Tomamos directamente de la documentación los datos para elaborar cédulas muy similares a las creadas para la primera sección. Ese método simplificó el proceso de ordenamiento y clasificación; sin embargo, no podemos cuantificar las pérdidas, ni ofrecer información sobre los criterios y funcionamiento del juzgado durante este periodo, más allá de los datos que brindan los expedientes por sí mismos.

El acervo entre 1892 y 1920

A partir de 1892 se detecta una numeración distinta para los ramos civil y penal, lo que probablemente indica el fin del juzgado mixto y su sustitución por juzgados separados para cada ramo. No conocemos la fecha de la separación, pues hasta 1920 el juzgado parece haber sido todavía mixto. La separación de la documentación según su ramo, entonces, debe haber sido retroactiva. Tampoco conocemos a partir de cuándo inicia el nuevo conteo, pues la carátula del primer expediente penal de 1892 consigna el número 1053 y no hay indicios en los documentos previos de esa serie numérica. Hasta 1891, ya lo dijimos, los expedientes siguen un inventario que consigna y numera tanto asuntos penales como civiles.

Conforme a la secuencia numérica anotada en la carátula de cada expediente, el ramo penal alcanza hasta 1920 por lo menos 3,307 expedientes, es decir, 2,254 expedientes fueron registrados en estos 29 años. Las existencias reales se limitan hoy a 615 legajos, más 109 que corresponden al ramo pero que no siguen la secuencia numérica. Cerca de 90% los expedientes pueden ser considerados en bueno o regular estado, lo que significa que podrán consultarse tomando precauciones en su manejo. Está en malas condiciones 9% de la documentación y mientras no se tomen medidas para su conservación no deberá manipularse.

Existen faltas muy notorias entre el material penal: sobre un periodo de siete años no ha quedado un solo documento (1894, 1901, 1902, 1905, 1908, 1916, 1917); sobre otros periodos, como el que corresponde al año de 1909 y el que corresponde a 1913, existen sólo unos pocos expedientes. La falta total o casi total de los expedientes del periodo entre 1916 y 1917, que se presenta tanto para el ramo penal como para el civil, seguramente se debe a que éste fue el periodo más agudo de la guerra entre *mapaches* y *pinelistas* contra las tropas carrancistas que antes mencionamos. Es probable también que la escasa existencia documental sea muestra de la debilidad de las instituciones en la zona y de que las actividades de los juzgados no hayan sido vigorosas durante varios años, pues según la serie numérica sólo se habían abierto 69 expedientes durante estos dos años.

Igual que el ramo penal, el ramo civil sigue a partir de 1892 su propia numeración. Inicia con el 610 en 1892 y llega al legajo 2,044 en 1920; es decir, se crearon 1,434 expedientes en el lapso de los 29 años. En total se han recuperado 420 expedientes: 355 expedientes que siguen la serie numérica y otros 65 expedientes no numerados, pero que corresponden al ramo y al periodo.

Lo mismo que en el caso penal, varios años no cuentan con proceso civil alguno: 1902, 1906, 1908, 1915, 1917, 1918. Además entre 1893 y 1916 existen muy pocos expedientes. Ya hemos considerado que la ausencia casi total de documentación para los años de 1915-1918 se debe a la guerra de los *mapaches* y cabe la posibilidad de que las considerables pérdidas de los años anteriores hayan sido causadas por destrucción intencional o casual de los expedientes durante los enfrentamientos. Afortunadamente la tasa

de material en condiciones buenas o regulares alcanza 92%, lo que deja sólo 8% fuera de posibilidades de consulta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El departamento de Chilón–Ocosingo y su juzgado

Los pueblos que en uno u otro momento correspondieron a la jurisdicción del juzgado Chilón–Ocosingo forman parte de una región que Juan Pedro Viqueira ha llamado Montañas Zendales (Viqueira, 1997). Sin embargo, la división político-administrativa del territorio chiapaneco durante el siglo XIX sufrió continuas modificaciones y junto con ella la jurisdicción del juzgado que nos interesa. Las sedes de este tribunal también cambiaron y la documentación debe haber sido muchas veces reordenada y trasladada. Tomar en cuenta estas transformaciones ayuda a entender la dinámica de la institución y las ausencias de algunos pueblos durante algunos periodos. Puede también orientar búsquedas en otros fondos judiciales y de otra procedencia.

Sede de las autoridades políticas y del Juzgado Mixto de Primera Instancia fue en distintos momentos la villa de Ocosingo y Chilón. Tila tuvo en algunos momentos jurisdicción sobre algunos pueblos de la zona.

Nuestro Catálogo comienza en 1805, en los últimos años de la Colonia. *Grosso modo* el territorio de lo que es ahora el estado de Chiapas formaba la Intendencia de Chiapa, cuya administración estaba a cargo de un funcionario, el intendente, que reunía facultades ejecutiva, militar y judicial. De este funcionario dependía la impartición de justicia de lo común.

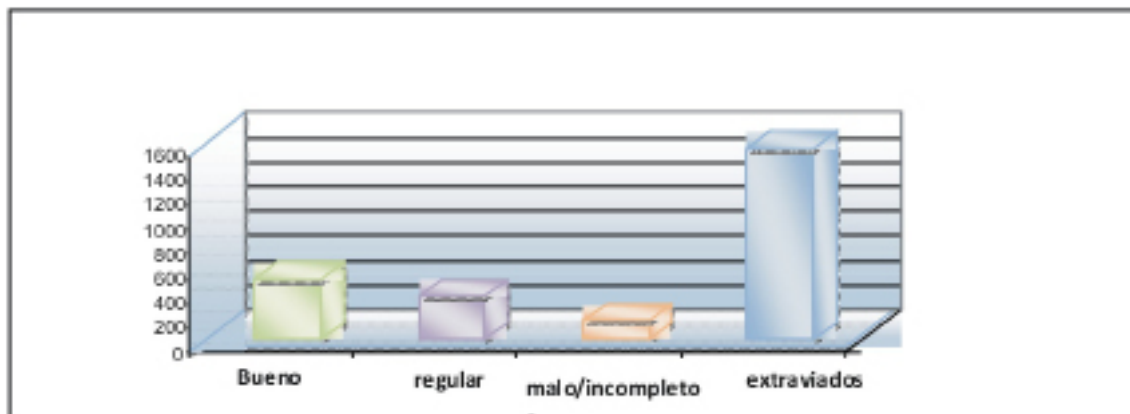
La tradición castellana y la ley exigían que los casos judiciales fueran resueltos por un letrado o perito en leyes (Borah, 1985: 55-57). En América la mayoría de los gobernadores de provincia no tenían formación legal y la salida preferida fue la del auxilio de un asesor que revisaba el proceso por escrito y emitía su opinión (*ídem*). Esta opinión se convertía en base para la sentencia.

Cotidianamente, empero, de las distintas regiones que conformaban la Intendencia, como de la que ahora nos ocupa, se encargaban subdelegados, funcionarios nombrados por el intendente y a quienes debían rendir cuentas. Los casos mayores y de apelación debían llevarse ante la Audiencia en la ciudad de Guatemala.

Los pueblos de indios, por otra parte, dirimían sus controversias internas ante sus propias autoridades; pero acudían al subdelegado o al intendente cuando no podían llegar a soluciones internas o en los casos que involucraran a personas de fuera del pueblo.

La provincia estaba dividida en once partidos: Ciudad Real, Llanos, Tuxtla, Tonalá, Ixtacomitán, Simojovel, San Andrés (que en la práctica dependía de Simojovel), Ixtacomitán, Huixtán, Zendales y Tila. Los pueblos que en distintas épocas formaron parte de la región de nuestro interés estaban en tres de esos partidos: Zendales, Huixtán y Tila. El partido de los Zendales tenía por cabecera la villa de Ocosingo y le pertenecían, además de la villa que lo encabezaba, Sitalá, Bachajón, Cancuc, Sibacá, Guaquitepec, Chilón y San Carlos (Altamirano); el partido de Huixtán incluía a este pueblo junto con Tenejapa, Oxchuc, Tenango, Cancuc y San Martín (Abasolo) y finalmente, el de Tila incluía el pueblo de Yajalón, además del propio Tila, Moyos, Petalcingo y Tumbalá.

Condiciones físicas del material documental, 1805 – 1891.



No han sobrevivido los primeros catorce expedientes que consigna el inventario, de modo que no tenemos ningún ejemplo directo proveniente de este fondo que nos dé a conocer los procedimientos que en la práctica se seguían. Contamos, no obstante, con un proceso fechado en 1798 sobre los ejidos del pueblo de Oxchuc, San Martín y San Carlos en el Fondo Histórico del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal (FHJSC I-5861). El caso fue remitido al intendente por el subdelegado y que éste atendió por medio de un juez delegado y el auxilio del asesor letrado, Carlos María González Castañón.

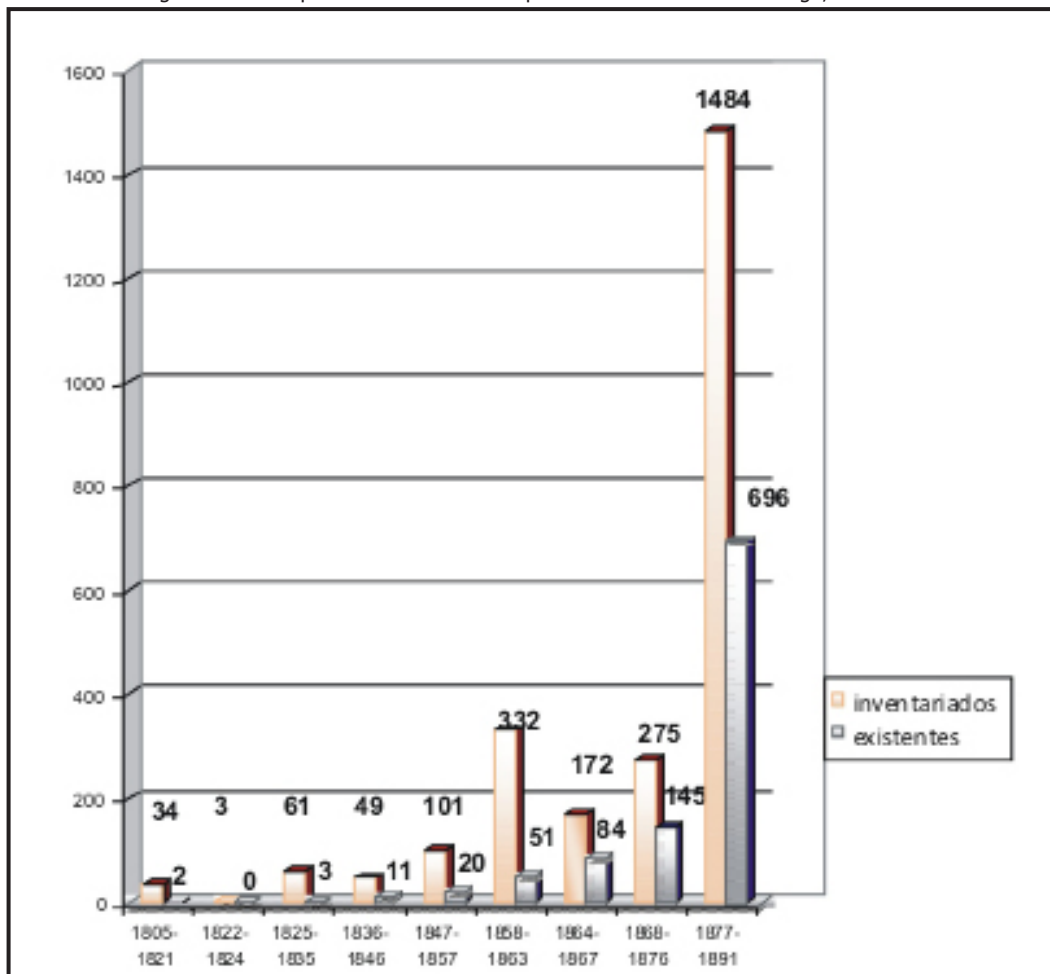
También extraviados están los expedientes pertenecientes a los años en que la Constitución de Cádiz (1812-1814) estableció los jueces de letras y los juzgados de primera instancia que debían existir en cada cabecera de partido (Ruiz Abreu, 1994: t. III: 9-36). Sabemos que se creó un juzgado de este tipo en la sede de poderes

de la provincia; pero desconocemos, si funcionó en el partido de los Zendaes, o si las formas previas siguieron rigiendo. Tampoco sabemos si en estos pueblos se establecieron ayuntamientos como lo ordenaba la Constitución (*ídem*).

Sólo existen dos expedientes coloniales en el fondo de Chilón-Ocosingo, ambos corresponden al periodo en que se había abolido la Constitución de Cádiz. Uno de ellos, en bastante mal estado, roto, pero parcialmente legible, versa sobre la desocupación de un sitio (FHJCH, exp. 23, 1815); el otro, en buenas condiciones, es un caso de homicidio (FHJCH, exp. 50, 1830).⁴ En ambos procesos funge como juez el subdelegado del partido de los Zendaes, don José León Zumaeta.

El siguiente documento es de 1830, un proceso por abigeato que conoció el juez de primera instancia de Ocosingo, Serapio Cancino (FHJCH, exp. 55, 1830). Es el único documento de esa época. El estado había tenido una nueva

Existencias documentales de los expedientes.
Juzgado mixto de primera instancia del departamento de Chilón-Ocosingo, 1805-1891.



división política y se habían formado departamentos y partidos. La mayoría de nuestros pueblos pertenecían al departamento del Sur y al partido de Ocosingo,⁵ villa que encabezaba la región (Trens, 1942:315-317). Tenejapa y Huixtán, sin embargo, pertenecían a distrito de San Cristóbal y Tila –con los pueblos de Petalcingo, Moyos, Sabanilla, Tumbalá y Yajalón– formaba un distrito del departamento del Norte (Ídem).

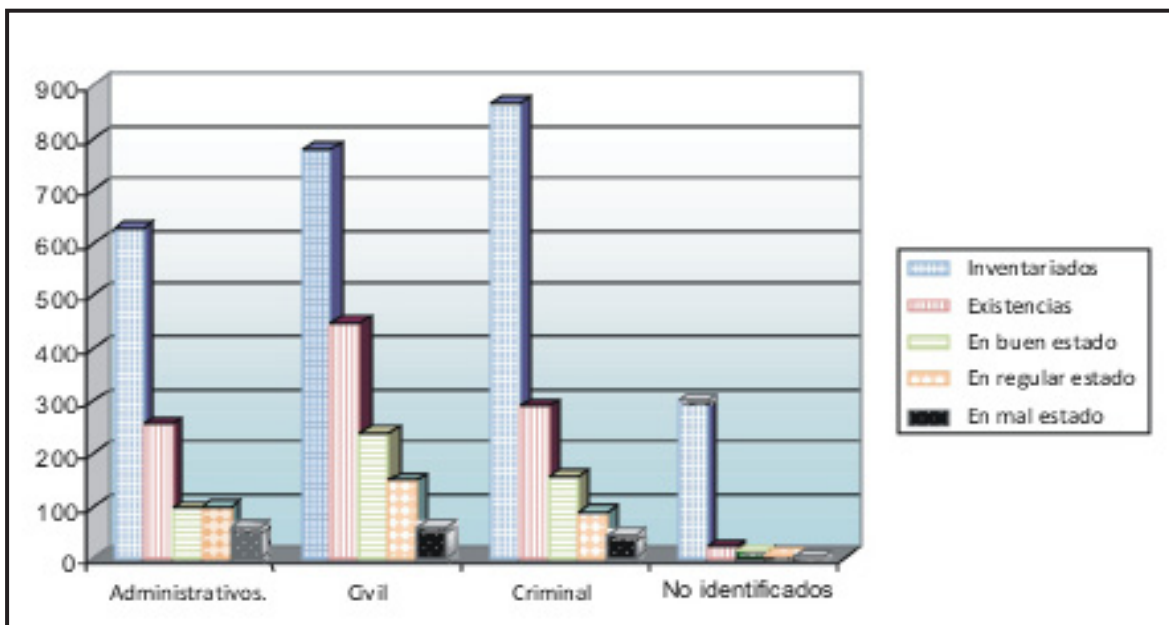
La Constitución había establecido la división de poderes e impedía la concurrencia de funciones en una sola persona. De la justicia ordinaria local se encargaban jueces de primera instancia; de las apelaciones, hasta la tercera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas que se creó el 29 de abril de 1825. En los negocios civiles y en las demandas por injurias era obligatorio intentar la conciliación antes de presentarse ante el juez, de modo que los pocos juicios que tenemos de este periodo en nuestro fondo se incluyen actas levantadas por un alcalde –uno de cuyos oficios era precisamente buscar la conciliación entre disputantes– para hacer constar el fracaso de esta vía. Enseguida los disputantes podían acudir a un juzgado de primera instancia.

De acuerdo con la Constitución debían nombrarse jueces para cada partido cuyo encargo era conocer de los negocios contenciosos civiles o criminales de su jurisdicción en primera instancia. Sin embargo, sólo se habían nombrado seis que servían en la capital, San Cristóbal,

en Comitán, Simojovel, Ocosingo y Palenque (Memorias de gobierno, 1828:14). En las demarcaciones político-administrativas a las que pertenecían los pueblos incorporados al fondo no existía juez de primera instancia; actuaba en su lugar un número indeterminado de alcaldes, jueces menores con atribuciones legalmente muy limitadas.

La década de 1830 fue un periodo de mucha inestabilidad política y hubo una multitud de gobernadores interinos y sustitutos. Entre tanto revuelo el nuevo gobierno no podía emitir leyes que dispusieran la manera de dirimir los problemas que se presentaban cotidianamente entre la población, ni sobre la organización o el funcionamiento de los juzgados. A falta de ello se emitieron algunos decretos y se ratificaron aquellas leyes del antiguo régimen que no contradijeran directamente la Constitución (Cruz, 2004:785). Por ello en la documentación de este periodo del fondo que nos ocupa, y sobre todo hasta la década de los setenta de ese siglo, los actores (o sus representantes) y asesores letrados de los jueces hacen continua referencia a las leyes coloniales: a algunos decretos de las Cortes entre 1811 y 1821; a la Recopilación de Indias de 1680; a la Novísima Recopilación y a la Nueva Recopilación de Castilla; a las Leyes de Toro y a las Siete Partidas.⁶ Siguen solamente las pocas orientaciones que proporciona la primera Constitución chiapaneca –que, retomando a la

Existencias documentales 1805- 1891, según ramo (civil, criminal o administrativo) y accesibilidad de consulta.



federal, conserva mucho de la Constitución de Cádiz de 1812– y algunos decretos dictados por las primeras legislaturas del estado. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo cuando tomó fuerza un proceso de codificación que abandonara finalmente la legislación colonial. La legislatura chiapaneca adoptó en 1872 el Código Civil del Distrito Federal y el Territorio de la Baja California, primer paso que llevó luego a nuevas formas legales (códigos) para el tratamiento de todos los asuntos contenciosos y administrativos. No obstante, la falta de jueces letrados seguramente dificultó su aplicación en las zonas rurales como la nuestra. Un estudio sobre la manera en que se administró la justicia en Chilón–Ocosingo está todavía por realizarse.

Inicialmente podemos asegurar que no era fácil encontrar personal capacitado que se encargara durante un tiempo prolongado de los asuntos del gobierno o de la justicia en Chiapas; mucho menos en un área rural como la de Chilón–Ocosingo. Los documentos de este Fondo permiten ver que apenas lograba escribir Martín Hidalgo, juez de primera instancia accidental, es decir, sustituto, del distrito en 1843 (FHJCH, exp. 105, 1843). Fue por ello necesario que el Poder Judicial tuviera asesores o contratara abogados para que apoyaran a los jueces en los procedimientos y sentencias. En nuestros documentos y durante muchos años cuando los jueces procedían por escrito, pues existen evidencias de que no siempre lo hacían, consultaban cada paso con sus asesores. Los asuntos civiles se llevaban con gran lentitud e incluso son interrumpidos antes de llegar a conclusión final. Los criminales tenían esta misma suerte, como veremos más adelante.

Un juez de primera instancia, cuando lo había, además, difícilmente podía cubrir las necesidades de una región tan grande como la que nos ocupa. En realidad una buena parte de la administración de la justicia dependía de los alcaldes, funcionarios electos en cada pueblo que no devengaban salario alguno. Su encargo legal debía limitarse a la conciliación y a atender pequeñas disputas que se resolvían verbalmente (Constitución Política del Estado de las Chiapas [1826] en Ruiz Abreu, 1994: t.III, 57-70), pero en realidad tomaban en sus manos todo tipo de asuntos como lo muestra el expediente 111 del Fondo Chilón–Ocosingo, inventariado en 1843.

La Memoria de Gobierno de 1830 presenta un panorama sobre la administración de justicia en

amplias zonas del Departamento, una de las cuales era precisamente la de Chilón–Ocosingo:

Los alcaldes de los pueblos suplen las veces de jueces de primera instancia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, y esto no favorece mucho a la pronta administración de justicia, pues se experimenta que en un mismo negocio se mudan tres cuatro o cinco jueces sin poder aplicarse con atención al despacho. También tienen que entender en los juicios de conciliación y verbales civiles y criminales; y como la mayor parte de ellos son los únicos que ocurren en los pueblos, resulta que toda la administración de justicia está confiada a los alcaldes (Memorias de Gobierno, 1830:14).

La escasez de jueces no era resultado de falta de abogados, pues existía en el estado una universidad y la abogacía era una profesión de prestigio:

...la verdadera razón es que los ciudadanos que poseen los conocimientos suficientes no quieren aceptar los juzgados con la responsabilidad que les es anexa, porque los pequeños sueldos que tienen asignados no compensan el trabajo, la responsabilidad y abandono de sus propios intereses, ni proporcionan una vida siguiera algo cómoda o exenta de penurias: y lo que sucede respecto de los jueces tiene lugar también con relación a sus secretarios (*idem*).

Uno de los resultados fue la lentitud con que se desarrollaron los casos en lo civil igual que en lo penal:

...los jueces tienen necesidad de consultar a los asesores, de cuya necesidad se siguen no solamente dilaciones, sino gravamen a las partes interesadas; dilaciones porque en las asesorías se demora el despacho de los negocios, ya sea a causa del recargo de trabajo que tengan, y porque los asesores se *escusen* de conocer de algunos asuntos, o ya por otra razón cualquiera; y gravamen porque a más de los derechos de asesoría tienen las partes que sufragar el gasto de porte de los expedientes, gasto que se duplica en los casos de *escusa* de los referidos asesores (*idem*).

Muchos casos se prolongaron por años, así sucedió con catorce reos detenidos en las cárceles de Ocosingo que en 1830 estaban sometidos a juicio desde tres años antes: "... se les apercibe a aquellos Jueces por la lentitud que observan, [pero] no se consigue su adelanto".⁷ En 1831 las autoridades registraron en Ocosingo diez reos por robo, uno por lesiones, 32 por homicidio y ninguno de ellos había sido sentenciado (Memoria de Gobierno, 1831).⁸

Había grandes diferencias entre los habitantes de la región que nos ocupa. Aunque la población no indígena, asentada por lo regular en las cabeceras de los distritos y partidos, era muy

escasa, tenía en sus manos la dirección administrativa y de gobierno de la región, especialmente hacia finales del siglo. La producción y venta de aguardiente (Bobrow-Strain, 2007:49-9), el comercio de diversos efectos con Tabasco, especialmente de cacao, (Washbrook, 2004), la cafecultura (Alejos, 1995), la extracción de maderas preciosas (De Vos, 1996) crearon grandes intereses y formaron enormes fortunas, especialmente hacia fines de siglo.

Cuando Chiapas se adhirió en 1824 a México, todos los municipios de lo que en un momento u otro formó parte del departamento de Chilón o de Ocosingo fueron considerados pueblos indios. Había, no obstante, un muy pequeño grupo de habitantes considerados no indígenas -"ladinos";⁹ según la terminología usual en Chiapas que se habían asentado en Ocosingo y Chilón. Sus propiedades no tenían mucha importancia; pues solamente en las cañadas de Ocosingo se habían formado ricas haciendas, propiedad de los frailes dominicos. Veinte años después el número de "ladinos" y el número de propiedades de distinta magnitud en sus manos aumentó considerablemente. Eran migrantes de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla que habían llegado a habitar permanentemente en los pueblos, buscando, casi todos, mejorar la mala fortuna que tenían en sus lugares de origen. Progresivamente la región ganó en importancia y atrajo a más gente, entre los cuales había familias adineradas, aunque éstos en general permanecieron en las ciudades y administraron sus propiedades y negocios a través de terceros. Encontramos intereses de integrantes de las familias más destacadas de Chiapas: Larráinzar, Armendáriz, Pineda, Paniagua, Roveló y Castellanos, cuyo control sobre los recursos y la mano de obra fue cada vez más notorio. Otro grupo de personas, también migrantes de las ciudades, se dedicó a proporcionar los servicios que las fincas y los negocios que en su torno se realizaban requerían para su funcionamiento.

Hacia el final de la primera parte del siglo y todo el resto del siglo XIX la región protagonizó las fuertes tensiones entre un número creciente de recién llegados y los habitantes de los pueblos. Las disputas por las tierras y el control sobre el trabajo indio fueron base de lucrativas actividades económicas comerciales y del cultivo de caña de azúcar para la elaboración de aguardiente. Sin embargo, la importancia del área se limitaba al ámbito regional.

La administración de justicia en la zona estuvo directamente en manos de propietarios y comerciantes o sus allegados y favorecían los intereses de este grupo a costa de los pueblos. Es justo considerar, sin embargo, que algunas de las autoridades indias se coludieron y actuaron en contra de su gente (López, 2009) como ocurrió en otros muchos lugares (Rus, 2004).

A finales del siglo XIX la población no-indígena representaba ya el 30% del total de los habitantes del departamento (Rabasa, 1892); controlaba las mejores tierras, el comercio y tenía el monopolio de los puestos administrativos y de gobierno en los pueblos. En algunos casos sus propiedades alcanzaban extensiones mayores que las tierras de los pueblos colindantes y concentraban en ellas una cantidad cada vez mayor de peones endeudados y baldíos indígenas.

En las últimas dos décadas del siglo XIX la elite local ladina se alió con un grupo pequeño, pero financieramente potente, de inversionistas extranjeros, originarios de España, Alemania y Bélgica. La dinámica de nuestra región giró entonces en torno a la explotación de las maderas preciosas y del café (Cancino, 2009).

El control sobre la mano de obra indígena era necesario para todas estas empresas. No es extraño entonces que se aplicara la justicia conforme a intereses personales o de grupo y que las asimetrías facilitaran la corrupción. Ya desde 1846 el gobierno admite:

En este ramo como en hacienda es en donde ha cundido más cáncer en la sociedad. La organización de los tribunales ha seguido las fases de la revolución. La relajación de los vínculos sociales por causa de éstas ha traído la corrupción y la arbitrariedad. La responsabilidad es nula, y no hay juez de paz ni alcalde que no pueda impunemente vejar y atropellar a los vecinos de su jurisdicción (Memoria de Gobierno, 1846).

Todavía cuarenta años después la situación no había cambiado mucho de acuerdo con la Memoria de Gobierno de 1870:

Sucede también en varios departamentos que por no haber personas de alguna instrucción, a quienes encomendar el desempeño de los juzgados de primera instancia, viene este a recaer en los alcaldes llamados por la ley, cuyas personas por lo regular carecen de tal manera de conocimientos y de práctica, que tienen necesidad de consultar hasta la tramitación que debe darse a los expedientes, circunstancia que hace más dilatoria y costosa la expedición de los negocios (Memoria de Gobierno, 1870).

A pesar de todas sus malas prácticas e ineficiencias, nuestro Catálogo que abarca casi un

siglo de expedientes judiciales entre civiles y penales, permite ver que se mantenían los rituales jurídicos, signo de la importancia que esta institución tenía por muy diversas razones.

Formación de estudiantes y sus trabajos

El fondo judicial del Juzgado Mixto de Chilón es una fuente prácticamente virgen para los estudios sociales de todo tipo. El estado desordenado de su acervo había dificultado la consulta y solamente Aaron Bobrow-Strain (2007) y Sarah Washbrook (2004) se habían acercado a la documentación de manera limitada. Ahora presentamos brevemente los resultados del trabajo de dos estudiantes de la licenciatura de historia: Iván Christian López Hernández, cuya tesis aborda el miedo ladino frente la insurrección india en la región de Chilón durante el siglo XIX, y Joaquín Prado Cancino, que analiza, por medio de los préstamos hipotecarios, los intereses económicos que se movieron en la zona durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Ambos trabajos se nutrieron de documentación del fondo que aquí introducimos.

Mucho se ha escrito sobre algunas sublevaciones ocurridas en el territorio ahora chiapaneco, especialmente sobre lo sucedido en buena parte de lo que entonces fue la alcaldía mayor de Chiapa en 1712 (abordado exhaustivamente por Juan Pedro Viqueira, 1997 y 1998). También se han discutido mucho los hechos acaecidos de 1869 en los Altos de Chiapas. Sobresale entre los trabajos actuales sobre este tema el brillante artículo de Rus (2004), que descubre las evidencias documentales de los acontecimientos de ese año y de su contexto y que relatan lo ocurrido de forma muy distinta a las versiones de periodistas e historiadores decimonónicos acerca de la supuesta ofensiva de los indios contra "la civilización".¹⁰ Sin embargo, pocos trabajos actuales se han ocupado de la región de Chilón-Ocosingo o a la perspectiva de los no-indígenas sobre las rebeliones o las posibilidades de una rebelión. El interés que reviste para nosotros la tesis de Iván Christian López Hernández es, entonces, el de introducirnos, con fuentes del fondo histórico de Chilón-Ocosingo, a la manera en que las tensiones entre los intereses encontrados de los nuevos pobladores y los pueblos indígenas, se expresaron legalmente como acusaciones de sublevación. En seguida un muy breve resumen de este trabajo elaborado por su propio autor.

"La construcción mental del enemigo. La percepción ladina de las sublevaciones indígenas en el departamento de Chilón, Chiapas, 1841-1889", tesis de licenciatura de Iván Christian López Hernández (Facultad de Ciencias Sociales, 2009)

El pequeño grupo de comerciantes y hacendados ladinos que radicaban en el departamento de Chilón temía que indígenas de los pueblos se sublevaran en su contra. Este sentir quedó de manifiesto en las denuncias de sublevación indígena que realizaron varias veces desde la década de 1840 y durante todo el siglo XIX. Las denuncias se basaron en la representación colectiva dominante sobre el indio bárbaro, inclinado a arrasar con "la civilización". Este esquema mental fue el resultado de la convivencia entre indios y españoles desde la época colonial en la que dominó la desigualdad económica, política e imposición religiosa en detrimento de los pueblos indios.

Las políticas orientadas a la reactivación económica durante el siglo XIX permitieron que algunos ladinos se hicieran de grandes extensiones de tierra en el departamento y que otros –por lo regular comerciantes– se establecieran en los pueblos. La población ladina, aunque una pequeña minoría en el departamento, se apropió de tierras, de la fuerza laboral india y de los puestos de gobierno. Estos cambios tensaron la ya difícil relación entre indios y ladinos y crearon un clima violento en el departamento de Chilón. El ambiente hostil –junto con acontecimientos como la "guerra de castas" de Yucatán en 1847 y la supuesta insurrección en Los Altos de Chiapas durante 1869 y la competencia por la tierra entre indios y ladinos– hicieron creíble una sublevación indígena.

Para aplacar sus propios temores y al mismo tiempo mantener el dominio sobre los indios, los ladinos recurrieron a denuncias de sublevación. Con ello lograron que las fuerzas armadas del Estado intervinieran en los pueblos e intimidaran a los indios, dificultando así toda acción que afectara sus intereses.

La segunda tesis –elaborada también de manera paralela al proceso de catalogación del Fondo histórico del Juzgado Mixto de Primera Instancia Chilón-Ocosingo (1805–1920) y con los materiales de él provenientes– toma como tema un asunto poco trabajado en Chiapas y un tipo de documentación no muy frecuentemente

citada. Aborda los créditos hipotecarios, centro de la vida económica de una entidad donde el circulante era escaso. La tesis, además, es una primera mirada hacia el lugar que ocuparon los comerciantes, propietarios de ranchos y fincas y políticos del área encabezada por la villa de Chión en los complejos negocios que se entablaron en la zona hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este trabajo abre un camino, seguramente muy productivo, para futuras investigaciones. Su autor presenta enseguida un sucinto resumen de su trabajo.

“Los créditos hipotecarios sobre fincas rústicas en el departamento de Chiión a finales del siglo XIX”, tesis de licenciatura de Joaquín Prado Cancino (Facultad de Ciencias Sociales, 2009)

La temática de los créditos hipotecarios es una ventana para el conocimiento de las estructuras económicas y sociales. En el caso de Chiapas la declaración de las leyes de Reforma en 1857 implicó la ruptura con un pasado colonial que había colocado a la Iglesia como la institución prestamista más importante y que permitió al gobierno tomar en sus manos la regulación de la propiedad a través del Registro Público de la Propiedad. Entre otras cosas le fue asignada a esta institución el registro y regulación de los créditos hipotecarios. Estos créditos se convirtieron en la principal forma de obtener recursos, dada la tardía introducción de las instituciones bancarias en Chiapas.

En ese contexto se consolidó un nuevo grupo de propietarios en la región de Chiión. La mayoría de los que intervinieron en los préstamos hipotecarios fueron propietarios e integrantes de las familias más importantes de San Cristóbal hacia finales del siglo XIX: los Paniagua y los Pineda de San Cristóbal; los Castellanos de Comitán, que acumularon propiedades en el propio Comitán y en San Carlos; la familia Navarro, especialmente el notario Porfirio A. Navarro, que residía en Ocosingo; y otras. Aparecen también empresas extranjeras, especialmente la española Casa Bulnes, con intereses en la comercialización de maderas preciosas y dos de origen alemán, Oetling y Koch y Oetling Gebrüder, cuyo negocios giraban en torno a la cafecultura.

Por mandato de un decreto de 1890, el juez de primera instancia del departamento de Chiión formó extractos de los contratos de hipotecas re-

gistrados en 1872. Esta práctica se siguió hasta 1922. Dichos créditos hipotecarios habían sido gravados sobre fincas rústicas y ranchos ubicados en los municipios del departamento de Chiión.

Las transacciones hipotecarias, aunque muchas veces reforzaron vínculos familiares y relaciones políticas, ignoraron las fronteras entre las facciones políticas y favorecieron la formación de redes sociales que salieron del ámbito local o incluso nacional. Los créditos hipotecarios permitieron a un pequeño grupo de productores e inversionistas del departamento que nos ocupa atraer financiamiento y entablar un puente entre el mercado local y los intereses nacionales e internacionales. La caña de azúcar y la producción de aguardiente abastecía los mercados locales, mientras que las inversiones en formas de créditos hipotecarios posicionaron al café y las maderas preciosas como principales productos de exportación.

CONCLUSIONES

Los archivos históricos judiciales, así lo hemos sustentado, constituyen una fuente privilegiada para realizar estudios de diversa índole sobre regiones o periodos específicos, sobre instituciones, familias o personajes, o sobre transformaciones que a largo plazo ha sufrido su territorio. Este artículo se ocupa fundamentalmente de introducir una documentación, todavía muy poco estudiada, reunida en el fondo histórico del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Chiión-Ocosingo, catalogada entre 1805 y hasta 1920. Tiene la intención fundamental de dar a conocer a la comunidad académica la existencia de un catálogo con el doble propósito de facilitar el acceso a los expedientes y reflejar la organización de la institución durante el tiempo que abarca.

Hemos querido proporcionar alguna información sobre la administración de justicia en Chiapas y sus mutaciones durante el siglo al que los legajos hacen referencia. Los ejemplos que utilizamos son del fondo que nos ocupa producto de una exploración preliminar sobre la manera en que se aplicaba en esta área fundamentalmente rural. Consideramos, sin embargo, que estos datos aunque insuficientes todavía, en algo ayudarán a quien se anime a explorar la documentación desde el punto de vista de la historia del derecho.

A pesar de las enormes pérdidas que ha sufrido el fondo estamos seguros que proporcio-

nará información novedosa. Así nos lo sugiere la revisión somera que realizamos al momento de su catalogación y las dos tesis de licenciatura elaboradas a partir de fuentes de ahí provenientes. Nos permitimos por ello augurar la riqueza que se esconde entre los expedientes civiles, criminales y administrativos que en éste se resguardan.

REFERENCIAS

- Alejos García, J. (1995). *Semiología del discurso agrario en el norte de Chiapas*. Tesis de Doctorado en Antropología Lingüística. México: UNAM.
- Bobrow-Strain, A. (2007). *Intimate enemies. Landowners, power and violence in Chiapas*. Duke University Press.
- Borah, W. (coord.). (1985). *El gobierno provincial en la Nueva España 1570-1787*. (Serie Historia Novohispana/33). México: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM
- Cruz Barney, O. (2004). *Historia del derecho en México*. Colección Textos Jurídicos Universitarios. México: Oxford University Press México.
- De Vos, J. (1988). *Oro verde. La conquista de la Selva Lacandona por los madereros tabasqueños 1882 – 1849*. México: Gobierno del Estado de Tabasco – FCE.
- López Hernández, I.C. (2009). *La construcción mental del enemigo. La percepción ladina de las sublevaciones indígenas en el departamento de Chilón, Chiapas, 1841-1889*. Tesis para obtener el grado de licenciado en historia. Facultad de Ciencias Sociales. UNACH.
- Lutz, C. (1984). *Historia sociodemográfica de Santiago de Guatemala, 1441-1773*. (Monografías, 2). Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.
- Memoria del estado actual en que se hallan los ramos de la administración pública de Las Chiapas. Capital. Imprenta de la Sociedad, 1828.
- Memoria del estado en que se hallan los ramos de la administración pública de Las Chiapas. San Cristóbal. Imprenta de la Sociedad dirigida por Secundino Orantes, 1830.
- Memoria del estado en que se hallan los ramos de la administración pública de Las Chiapas. San Cristóbal. Imprenta de la Sociedad dirigida por Secundino Orantes, 1831.
- Memoria del estado en que se hallan los ramos de la administración pública del estado de Chiapas. San Cristóbal, 1846.
- Memoria de gobierno en El Espíritu del Siglo. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. T.VI, núm.5, Octubre, 1870.
- Obara, T. (2007). *Ladinización sin mestizaje. Historia socioeconómica del área chiapaneca, Chiapas 1748-1813*. Tesis de maestría en Antropología Social. México: CIESAS.
- Paniagua, Flavio Antonio. (2003). *Florinda*. CESMECA-UNICACH. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
- Prado Cancino, J. (2009). *Los créditos hipotecarios sobre fincas rústicas en el departamento de Chilón a finales del siglo XIX*. Tesis para obtener el grado de licenciado en historia. Facultad de Ciencias Sociales, UNACH.
- Rabasa, R. (1895). *El Estado de Chiapas. Geografía y estadística, recursos del estado, sus elementos, condiciones de riqueza, porvenir agrícola, etc.*, México, Tipografía del Cuerpo Especial de Estado Mayor.
- Ruz, J. (1995). "¿Guerra de castas según quién? Indios y ladinos en los sucesos de 1869". En Juan Pedro Viqueira y Mario Ruz (editores). *Chiapas. Los rumbos de otra historia*. México: Centro de Estudios Mayas, IIF, UNAM/CIESAS/Centre d'Études Mexicaines et Centraméricaines/Universidad de Guadalajara. (145-174).
- Ruz, J. (2004). "Revoluciones contenidas: los indígenas y la lucha por Los Altos de Chiapas, 1910-1925". *Mesoamérica* 46 (57-85).
- Ruz, M.H. (1992). *Savia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas comitecas (siglos XVIII y XIX)*. CONACULTA. México.
- Ruiz Abreu, C. (Coord.) (1994). *Historia del H. Congreso del estado de Chiapas, 1821-1994*. 3 tomos. Gobierno del estado. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Trens, Manuel B. 1942. *Historia de Chiapas desde los tiempos más remotos hasta el gobierno del general Carlos A. Vidal (¿...1867)*. México: La Impresora S. Turanzas del Valle.
- Viqueira, J.P. (1997). *Cronotopología de una región rebelde: la construcción histórica de los espacios sociales en la Alcaldía Mayor de Chiapas (1520-1720)*, Tesis de doctorado, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Viqueira, J.P. (1995). "Las causas de una rebelión india: Chiapas, 1712" en Juan Pedro Viqueira y Mario Ruz (editores), *Chiapas. Los rumbos de otra historia*. México: CEM-IIF, UNAM; CIESAS, CEMCA y UG. (103-143).
- Washbook, S. (2004) "Indígenas, exportación y enganche en el norte de Chiapas, 1876-1911. *Mesoamérica*, 46 (año 25: 1-25).

Documentos citados:

Fondo histórico del juzgado mixto de primera instancia de Chilón-Ocosingo (FHJCH)

Expediente 23, 1815

Expediente 50, 1830

Expediente 55, 1830

Expediente 105, 1843

Expediente 111, 1843

Fondo histórico del juzgado de primera instancia de lo civil de San Cristóbal Las Casas (FHJSC)

I- 5861, 1798 "Los indígenas de Oxchuc contra el teniente del pueblo"

NOTAS

¹ Este catálogo está próximo a salir a la luz en edición conjunta del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias de Mesoamérica y el Sureste del Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM y el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Sus fondos están resguardados en el Archivo del Poder Judicial, Región Altos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

² Hemos ordenado y clasificado el material hasta el año de 1920, fundamentalmente por razones de tiempo.

³ Es importante señalar, sin embargo, que el acceso directo a los fondos y su documentación depende no de quienes esto escriben, sino del Poder Judicial. Nuestra aportación y responsabilidad se refiere únicamente al Catálogo sobre el fondo, disponible por ahora en versión preliminar- mientras se realiza el largo procedimiento académico-administrativo que requiere una edición conjunta- en las bibliotecas del IEI, UNACH y PROIMMSE, UNAM; así como en el Archivo Judicial Regional de Los Altos de Chiapas y el Archivo Judicial.

⁴ El expediente fue inventariado en 1830, sin embargo se trata de un proceso iniciado en 1815 y finalizado en 1819.

⁵ Ocosingo, Sibacá, Sitalá, Guaquitepec, Bachajón, Chilón, San Carlos, Oxchuc, Cancuc, Tenango y San Martín. Tene-

japa y Huixtán estaban incluidos en el distrito del Centro con cabecera en San Cristóbal y Yajalón, en el distrito de Tila, departamento del Norte (Trens, 1942: 315-317).

⁶ Algunas de estos textos pueden encontrarse en la llamada Sección Antigua de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.

⁷ "Estado que manifiesta los trabajos de la suprema corte de justicia y de cada una de sus salas en el año de 1829, así en lo civil como en lo criminal, el número de reos que hay en cada partido, y el estado de sus causas" en Memoria de Gobierno de 1830.

⁸ La memoria no indica cuánto tiempo llevaban los reos encarcelados o cuándo fueron cometidos los delitos, pero es probable que al menos algunos de ellos sean los mismos que los registrados en la Memoria de Gobierno anterior.

⁹ Esta categoría, igual que la de indio o de indígena y de otras clasificaciones de las personas, se construyó durante una larga y compleja historia y más que producto de herencias biológicas es resultado de las relaciones sociales. Lutz (1984), Ruz (1992), Obara (2007) y otros han abundado en ello.

¹⁰ Bien conocida es la novela Florinda escrita por Flavio Paniagua (2003), quien sustenta que los sancristobalenses habían enfrentado una verdadera "guerra de castas".